

Santiago, dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que en este juicio ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual seguido ante el Trigésimo Juzgado Civil de Santiago bajo el Rol C-2943-2019, caratulado “Rivera con Red de Televisión Chilevisión S.A.”, se ha ordenado dar cuenta de admisibilidad de los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por la demandante y de casación en el fondo interpuesto por la demandada, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha quince de diciembre de dos mil veintitrés, que revocó el fallo de primer grado de diecisiete de julio de dos mil veinte y, en su lugar, declaró que se accede a la demanda solo en cuanto se condena a la demandada a pagar a la actora, a título de indemnización de lucro cesante, la suma de \$2.400.000, y por concepto de daño moral causal causado la cifra de \$5.000.000, cantidades que deberán ser solucionadas por reajustes, según la variación del índice de precios al consumidor, a contar de la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada y con interés corriente para operaciones desde que el deudor incurra en mora.

I.- EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA DE LA DEMANDANTE:

Segundo: Que la recurrente esgrime la causal de nulidad formal contemplada en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 N° 4 del mismo cuerpo legal, por omisión de las consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento para fijar el daño moral, que condujo erróneamente a los sentenciadores a determinarlo en la precaria suma de \$5.000.000 y no en los \$400.000.000 solicitados, existiendo evidente falta de coherencia o correspondencia entre las afirmaciones del fallo y la suma establecida, ya que la única referencia para fundar la suma concedida dice relación con la masiva difusión y liviandad con que procedió la demandada, sin ponderar las pruebas aportadas a la hora de cuantificar económicamente el daño moral sufrido por su representada. Agrega que no se hace referencia al informe psicológico acompañado y, no objetado; ni a la documental consistente en resoluciones de nombramiento del poder judicial, informes de desempeño de folio 48 que acreditan su prestigio y posición profesional de que gozaba su representada antes de ser agraviada, ni al acta notarial de copropietarios del edificio en que vivía la demandante, en que le solicitan demostrar su honorabilidad tras estar involucrada en un caso de connotación pública, ni el documento por el cual ponen término a sus servicios anticipadamente., ni a la cuantificación y gravedad que del daño moral hacen los testigos.



Tercero: Que, respecto de la causal formal invocada, no debe olvidarse que el defecto aparece sólo cuando la sentencia carece de las consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento, no así cuando aquéllas no se ajustan a la tesis sustentada por el reclamante. Y una atenta lectura del fallo cuestionado permite verificar que en este sí se explicitan las razones que llevaron a los juzgadores acoger la demanda solo en cuanto -y en lo que interesa al recurso- condena a la demandada a pagar a la actora la suma de \$5.000.000 por daño moral, con reajustes e intereses por el período que indica.

En efecto, el fallo cuestionado, luego de señalar en su considerando décimo cuarto que se ha deducido demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Título XXXV del Libro IV del Código Civil y, cuyos presupuestos consisten en la existencia de una acción u omisión dolosa o culpable, que causa daño y que haya una relación de causalidad entre el hecho y el daño, razonan y dan por acreditado el primer presupuesto de la acción, esto es, la efectividad de los hechos y, que estos son abusivos de la libertad de informar, configurando un ilícito civil que genera responsabilidad extracontractual y de pronunciarse respecto de la indemnización solicitada por concepto de lucro cesante, razona en cuanto a la regulación de la indemnización por daño moral, expresando que para su cálculo se tendrá presente que la actora rindió prueba testimonial consistente en las declaraciones de Silvio Chueca Toledo y Rodolfo Maturana Mancilla y de Viviana Celis Corrales, de cuyos testimonios tiene por acreditado que, como consecuencia de los hechos materia de la demanda, la actora sufrió una indudable afectación psicológica y emocional que sólo puede ser entendida como un perjuicio de esta clase, por cuanto dichos declarantes exponen que a causal de la emisión del reportaje la actora sufrió enormes perjuicios, consistentes en la destrucción total de su imagen profesional y personal, familiar y social, puesto que tuvo que dejar de trabajar, no ha podido reinsertarse laboralmente y, que además fue funada [SIC] por los vecinos del condominio en el que vive, de manera que se ha visto en la necesidad de acudir constantemente a tratamiento psicológico. Añadiendo la última testigo que, a partir de la evaluación psicológica realizada, pudo determinar la existencia de daño psicológico compatible con la exposición mediática a que fue expuesta, además de padecer estrés agudo compatible con haber vivido una situación de características traumáticas, todo lo cual provoca sentimientos de indefensión, angustia, descontrol y estigmatización, además de padecer una depresión subclínica, que configura daño a largo plazo.

Continúa la sentencia recurrida en que, habiéndose demostrado la existencia del daño moral demandado y del vínculo causal que lo une con la actuación de la demandada, se hará lugar a la demanda en este extremo fijando prudencialmente su



monto en la cifra que se dirá en lo resolutivo, en cuya regulación se tendrá en especial consideración la masiva difusión de las expresiones denostadoras vertidas por la demandada y la evidente liviandad con la que se trató la situación que afectaba a la actora, precisando en lo resolutivo que por concepto de daño moral se condena a la demandada a pagar a la actora la suma de \$5.000.000.

Cuarto: Que acorde con lo que se viene narrando, la casación basada en el artículo 768 N°5 en relación con el artículo 170 N°4, ambos del Código de Procedimiento Civil, no puede tener acogida por no configurarse la causal formal.

II. EN CUANTO AL RECURSO DE CASACION EN EL FONDO DE LA DEMANDANTE:

Quinto: Que, en primer lugar, el recurrente funda su arbitrio de nulidad en que el fallo recurrido ha vulnerado lo dispuesto en los artículos 1700, 1702, 1699 y 1706 todos del Código Civil y 346 N° 3 Código de Procedimiento Civil, al no valorar en la determinación del daño moral el informe psicológico que analiza el daño de la víctima, acompañado en folio 49 elaborado por psicóloga experta Viviana Celis Corrales, que da cuenta de cómo afectó significativamente su vida, en ámbito laboral, social, económico y su salud, concluyendo existencia de daño a largo plazo, no objetado y reconocido en juicio. Asimismo, al no valorar la documental consistente en resoluciones de nombramiento e informes de desempeño del Poder Judicial que dan cuenta de su prestigio, confiabilidad y posición profesional, ni acta notarial de copropietarios del edificio en que vivía su representada, que da cuenta de la deshonra que sufrió en el lugar que se encuentra su hogar y con quienes integran su vida en comunidad, mediante el cual se le solicita que acredite su honorabilidad tras estar involucrada en caso de connotación publica, con motivo de postulación al comité de administración del edificio; así como tampoco considerar el documento por el que se dio termino anticipado a sus servicios, refrendado por testigos.

En segundo lugar, el impugnante denuncia que, en la determinación del daño moral la sentencia infringe lo dispuesto en el artículo 384 N° 2 del Código de Procedimiento Civil, en relación a las declaraciones de los testigos Silvio Chueca Toledo, Rodolfo Maturana Mancilla y Viviana Celis Corrales, contestes en la gravedad, extensión y profundidad del daño moral sufrido por la actora, además en sus circunstancias esenciales, sin tachas, legalmente examinados, y que dieron cabalmente razón de sus dichos, infringiendo dicha norma al no darles valor de plena prueba sobre la existencia de un grave y extenso daño moral, dos de ellos contestes en que el daño ascendió a una suma no inferior a los 400M, sin embargo, lo fija en la exigua suma de \$5.000.000.

En tercer lugar, sostiene que el fallo infringe lo dispuesto en los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, que consagran la reparación integral del daño, las que



estima fueron aplicadas incorrectamente, al no establecer que la demandante experimentó grave daño psicológico y que la reparación integral de dicho daño exigía compensar económicamente a la actora en la cifra reclamada en la demanda y no en la precaria suma de \$5.000.000, como lo hacen los sentenciadores.

Finaliza solicitando que se invalide la sentencia y se dicte una sentencia de reemplazo que aumente la indemnización por daño moral condenando a la demandada a la suma demandada o a una superior establecida en el fallo recurrido, con costas.

Sexto: Que la sentencia de primer grado -reproducida con excepción de sus razonamientos décimo noveno a vigésimo quinto y vigésimo séptimo a trigésimo primero, que se eliminan- da por acreditados los siguientes hechos:

1.- Que el 13 de marzo de 2015, se celebró un contrato de prestación de servicios entre don Oscar del Carmen Vega Elkins y Carola Pamela Rivera Campusano, a fin de realizar diversas gestiones en la causa Rol C-28.879-2000 seguida ante el Juzgado de Letras de Villa Alemana tendientes a la oposición al lanzamiento, en donde las partes acordaron el pago de la suma de \$1.500.000 pagaderos en 6 cuotas de \$209.000 a partir del 30 de abril de 2015, hasta el 30 de setiembre de 2015, y en caso que se logre sentencia favorable se pagaría el 30% del monto obtenido, y en caso que exista avenimiento el 40% del mismo monto.

2.- Que el 7 de octubre de 2015, entre Oscar Vega Elkins en representación de Oscar Vega Vega y Victoria Elkins Elkins e Inmobiliaria e Inversiones Puerta del Sol SpA., suscribieron un contrato de transacción mediante escritura pública, en la que se acordó el pago el \$90.000.000 más la entrega de dos inmuebles correspondientes a viviendas económicas nuevas acogidas al D.F.L. N°2, ubicadas en los lotes que indica del proyecto Inmobiliario Conjunto Residencial Marga Marga II.

3.- Que, suscrita la transacción, se pagó a la actora la suma de \$30.000.000.

4.- Que la demandante se desempeñó como asesora parlamentaria del diputado don Rodrigo González Torres, a partir del 7 de abril de 2014, correspondiendo el último contrato de trabajo al celebrado el 19 de enero de 2016, cuya vigencia se extendía hasta el 30 de diciembre del mismo año.

5.- Que el 7 de septiembre de 2016, se emitió en la franja denominada "Reportaje a fondo", en el Noticiero Central del canal Chilevisión. Un reportaje titulado "Ancianos acusan que su hijo los estafó en 90 millones. Una abogada que trabaja con un diputado estaría involucrada en un supuesto acuerdo notarial fraudulento" y, que dicho reportaje periodístico, fue producido por personal del canal televisivo demandado, circunstancia reconocida por las partes.



6.- Que durante la transmisión del reportaje aparecen diversas personas efectuando relatos de lo sucedido, incluyendo la “voz en off” del periodista Stjepag Tarbuskovic, además de franjas y mensajes emitidos en pantalla durante el reportaje, los que comienzan con la denuncia efectuada por dos mujeres, que en el reportaje aparecen como Luisa Vega y Graciela Vega, hijas del supuesto matrimonio afectado, quienes también aparecen en el video, además de Oscar Vega Elkins y la demandante. Asimismo, que el programa de televisión de que se trata pone de manifiesto que, si bien se reproducen los dichos de los denunciantes, en cuanto acusan a la demandante y a Oscar Vega de haberse apropiado indebidamente de \$90.000.000; se aprecia en el desarrollo de dicha nota y, a simple vista, la inclusión de expresiones que parecen reflejar el parecer del medio de comunicación acerca de la situación de que se trata.

Que, en el comienzo de la exhibición de la nota, se observa la existencia de una cinta escrita sobre la parte inferior de la pantalla en que se lee “Millonaria estafa de abogada”, y expresiones tales como “Trabaja en el Congreso Nacional”, “Es asesora legal de diputado”, oraciones que se reinstalan en los minutos que el fallo recurrido expresa durante la exhibición del reportaje, pudiendo verse en la enorme mayoría de la nota las referidas frases, manteniéndose aproximadamente en un 60% de la extensión del programa.

7.- Que dos días después del reportaje, el 9 de septiembre de 2016, se puso término anticipado al contrato de prestación de servicios celebrado entre don Pablo Ernesto Oneto García, Subsecretario Administrativo de la Cámara de Diputados y la demandante, como asesora parlamentaria para el Diputado Rodrigo González Torres, por la causal consistente en la decisión unilateral del parlamentario fundada en la pérdida de confianza hacia el prestador de servicios.

8.- Que el 17 de octubre de 2016 se realizó la audiencia de formalización en los autos RIT N° 749-2016, en contra de la actora por los delitos de estafa y apropiación indebida, la que, mediante audiencia de 27 de julio de 2017, el Ministerio Público comunica la decisión de no perseverar en el procedimiento debido a que no existen antecedentes para formular la acusación.

Séptimo: Que, sobre la base de los presupuestos fácticos mencionados precedentemente, en relación al primer presupuesto de la acción, esto es, a la comisión de un hecho ilícito, doloso o culpable por parte de la demandada, la sentencia recurrida concluye, que en la transmisión del reportaje en examen la demandada no se limitó a reproducir las acusaciones vertidas por terceros, sino que, añadió a tales conceptos expresiones propias que, por sí mismas, importan una denostación de la persona de la demandante.



En lo referente a lo expuesto por la demandada en cuanto que el programa fue presentado de manera condicional, sin presumir la culpabilidad de la actora en los hechos, del examen del contenido del mismo los sentenciadores arriban a una conclusión distinta, razonando que, por casi dos tercios de la duración del reportaje, se exhibió en pantalla y de manera promitente, la frase “Millonaria estafa de abogada”, la que no da cuenta de una posición neutral ni condicional acerca de la responsabilidad de la demandante, sino que refleja una clara toma de posición del medio de comunicación en torno a este punto, conforme al cual le atribuye, de manera explícita y sin que medie cuestionamiento alguno, la autoría de los hechos investigados.

Asimismo, refieren que en dicho programa se formuló expresiones categóricas e indubitadas respecto de la responsabilidad de la demandante en los hechos de que se trata, mismas que, como resulta evidente, fueron expuestas en un espacio televisivo de cobertura nacional y en un horario de máxima audiencia, todo lo cual se traduce en que el mensaje transmitido a sus espectadores, a través de un medio de comunicación social masivo ha debido generar en parte importante de la población del país la convicción o, cuando menos, la sospecha más que fundada que la actora es culpable de la estafa que se le imputa, comportamiento que no se encuentra amparado por las garantías de libertad de expresión y de libertad de prensa reconocidas en la Carta Fundamental, desde que el ejercicio de las mismas reconoce un límite en situaciones como las materia de la presente causa como se desprende del artículo 1 de la Ley N° 19.733.

Dado lo expuesto los jueces del fondo, concluyen que los referidos hechos son abusivos de la libertad de informar y que configuran un ilícito civil, que genera responsabilidad extracontractual, sin perjuicio de la calificación que de los mismos se pueda realizar en otra sede jurisdiccional, siendo irrelevante, en este contexto, si configura o no el delito de injurias, sin que pueda descartarse la responsabilidad de la demandada, ya que la citada norma deja en evidencia que la responsabilidad que se persigue puede surgir tanto de la comisión de un delito como del abuso de la libertad de que se trata, concepto que estiman posible encasillar en el comportamiento reprochado al medio de comunicación demandado.

Octavo: Que asentado lo anterior en cuanto a la existencia del ilícito civil de parte de la demandada y, que esta es, además plenamente capaz para responder civilmente de dicho ilícito, los jueces del fondo discurren sobre la efectividad del daño alegado.

Al efecto y, en lo relacionado al recurso, el fallo recurrido pronunciándose respecto a la procedencia del daño moral que se demanda, descartan primeramente la alegación del demandado en cuanto a su eventual improcedencia basada en el



artículo 2331 del Código Civil, concluyendo que no existe en nuestro ordenamiento jurídico alguna norma que exonere de responsabilidad a los medios de prensa y comunicación y, que como ya lo ha decidido esta Corte en los autos Rol N°6296-2019, del examen del citado precepto, “no puede desatenderse el principio de reparación integral del daño, así como tampoco puede desconocerse el rol de la responsabilidad civil como herramienta de protección – entre otros- de los derechos de la personalidad, tales como el honor, la imagen y la intimidad cuya afectación es apta para provocar un daño de carácter extrapatrimonial en la persona”, descartando que la literalidad de la citada disposición, contenga una exclusión expresa de la reparación del daño moral.

Establecido lo anterior, la sentencia recurrida estima acreditado que, como consecuencia de los hechos materia de la demanda, la actora sufrió una indudable afectación psicológica y emocional que sólo puede ser entendida como un perjuicio de esta clase, ello conforme al mérito de las deposiciones de los testigos Silvio Chueca Toledo, Rodolfo Maturana Mancilla y Viviana Celis Corrales, quienes depusieron en cuanto a que a causa de la emisión del reportaje la actora sufrió enormes perjuicios, consistentes en la destrucción total de su imagen profesional y personal, familiar y social, puesto que tuvo que dejar de trabajar, no ha podido reinsertarse laboralmente y, además fue funada [SIC] por los vecinos del condominio en el que vive, de manera que se ha visto en la necesidad de acudir constantemente a tratamiento psicológico. Precizando la última de las deponentes que, a partir de la evaluación psicológica realizada, pudo determinar la existencia de daño psicológico compatible con la exposición mediática a que fue expuesta, además de padecer estrés agudo compatible con haber vivido una situación de características traumáticas, todo lo cual provoca sentimientos de indefensión, angustia, descontrol y estigmatización, agregando que, también padece de una depresión subclínica, que configura un daño a largo plazo, dando con ello demostrada la existencia del daño moral demandado y del vínculo causal que lo une con la actuación de la demandada, procediendo a fijar prudencialmente su monto en la cifra de \$5.000.000., expresando que para tal regulación, se ha tenido especial consideración la masiva difusión de las expresiones denostatorias vertidas por la demandada y la evidente liviandad con la que se trató la situación que afectaba a la actora.

Noveno: Que asentado lo anterior, queda de manifiesto que las alegaciones del impugnante persiguen desvirtuar los supuestos fácticos fundamentales fijados por los sentenciadores para la evaluación del daño moral, esto es, la existencia -en la actora- de daño psicológico compatible con la exposición mediática a que fue expuesta, el padecimiento de estrés agudo compatible con haber vivido una



situación de características traumáticas, sentimientos de indefensión, angustia, descontrol y estigmatización, así como el vínculo causal que une dicho padecimiento moral a la actuación de la demandada.

Décimo: Que en este sentido resulta pertinente recordar que solamente los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar los hechos de la causa y, efectuada correctamente dicha labor en atención al mérito de las probanzas aportadas, ellos resultan inamovibles conforme a lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, no siendo posible su revisión por la vía de la nulidad que se analiza salvo que se haya denunciado de modo eficaz la vulneración de las leyes reguladoras de la prueba que han permitido establecer el presupuesto fáctico que viene asentado en el fallo, lo que no acontece en el caso de autos, ya que examinado el recurso de casación se puede constatar que los fundamentos esenciales de su libelo dicen relación con el sentido y alcance que corresponde conferir a la prueba documental y, testimonial rendida en autos. Sin embargo, tal actividad se agotó con la valoración que hicieron los jueces del fondo, quienes tras ponderar todos los antecedentes y en uso de las facultades que les son propias, acogieron la demanda por concurrir los presupuestos de la acción.

Respecto a la vulneración a las leyes reguladoras de la prueba, ello no es efectivo, ya que los jueces del fondo valoraron correctamente la prueba en su conjunto para tener por asentado la existencia del daño moral, en especial, la testimonial aportada por la demandante, la que incluye la deposición de la psicóloga Vivian Celis Corrales, profesional que elaboró el informe psicológico que se señala omitido, no vislumbrándose, en consecuencia, infracción a la normativa denunciada.

Undécimo: Que en mérito de lo expuesto no es posible alterar la situación fáctica que viene determinada en el fallo cuestionado y establecer una distinta, porque los hechos que sirvieron de base a las conclusiones de los sentenciadores resultan inamovibles y definitivos para este tribunal de casación.

Décimo Segundo: Que lo razonado lleva a concluir que el recurso de casación en el fondo no puede prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

III.- EN CUANTO AL RECURSO DE CASACION EN EL FONDO DE LA DEMANDADA:

Décimo Tercero: Que en su arbitrio de nulidad sustancial la impugnante denuncia infringido el artículo 2314 del Código Civil, al revocar la sentencia del tribunal a quo, pese a la inexistencia de un hecho ilícito generador de responsabilidad, accediendo a la demanda, no obstante que el reportaje periodístico no imputa hecho ilícito alguno a la demandante, sin que su representada haya incurrido en acto alguno como el indicado en la demanda, al no haber alterado la información o falsearla, sin existir culpa, ni dolo.



Finaliza solicitando que se invalide la sentencia y se dicte una de reemplazo que rechace la demanda.

Décimo Cuarto: Que el artículo 772 N°1 del Código de Procedimiento Civil sujeta el recurso de casación en el fondo a un requisito indispensable para su admisibilidad, esto es, que el escrito en que se interpone exprese, es decir, explicité en qué consisten y cómo se han producido el, o los errores, siempre que estos sean de derecho.

Décimo Quinto: Que, atendido que en este juicio dice relación con la indemnización derivada de la responsabilidad extracontractual en que incurrió la demandada respecto de la actora, la exigencia consignada en el motivo precedente obligaba a la impugnante a denunciar como infringidos aquellos preceptos que, al ser aplicados, servirían para resolver la cuestión controvertida. Sin embargo, el recurrente omite extender la infracción legal a los artículos 2329 y 2331 del Código Civil, teniendo en consideración que fue precisamente esta normativa la que sirvió de sustento jurídico a los sentenciadores para acoger la acción. Y al no hacerlo genera un vacío que la Corte no puede subsanar, dado el carácter de derecho estricto que reviste el recurso de nulidad intentado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 771, 772, 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se declara **inadmisible** el recurso de casación en la forma y **se rechaza** el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado Víctor Manuel Demaría Varas, en representación de la demandante y, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado Nicholas Martínez Escobar, en representación de la demandada, en contra de la sentencia de quince de diciembre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese y devuélvase, vía interconexión.

Rol N° 1.217-2024.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, integrada por los Ministros señor Juan Eduardo Fuentes B., señor Arturo Prado P., señor Mauricio Silva C., señora María Soledad Melo L. y el Abogado Integrante señor Raúl Patricio Fuentes M.

No obstante, haber concurrido a la cuenta de admisibilidad y al acuerdo, no firma el Ministro señor Fuentes B., por estar con feriado legal.





En Santiago, a dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

